

La directiva del Partido Comunista de Chile y Salvador Allende, habían impuesto la tesis de congelar el proceso bajo el lema de «consolidar lo que tenemos, primero, para después avanzar». Pero ocurría que lo «que tenemos» era lo que definía Vuskovic: un poder económico sustancial en la burguesía, un área social de la economía inocua para poder impedir el sabotaje de la producción por parte de los enemigos del Gobierno, unas Fuerzas Armadas en constante preparación para «el asalto final al Poder» y una clase trabajadora frenada en sus ímpetus revolucionarios, desarticulada a diario por todos esos factores combinados y objeto de una relativamente exitosa campaña de propaganda de la oligarquía y el imperialismo.

### *Nuevo complot militar*

Las fuerzas políticas, parlamentarias, judiciales y gremiales desatadas por la ofensiva planificada por la Sociedad de Fomento Fabril para llegar a la meta de derrocar «legalmente» a Salvador Allende, habían comenzado a recibir desde muy temprano el apoyo de los organismos controlados por la Agencia Central de Inteligencia en Chile. Esta ayuda no sólo procedía de los *items* «gastos varios», «gastos de representación» o «propaganda» de las grandes empresas monopólicas chilenas, sino también de empresas multinacionales como la ITT (que en mayo de 1972 fue requisada por el Gobierno por fraude tributario y por haber participado abiertamente en la conspiración de septiembre-octubre de 1970), la Anaconda y la Kennecott (que habían declarado una verdadera guerra contra el Gobierno de Allende, incluyendo el embargo de cargamentos de cobre chileno en puertos extranjeros, como comenzó a ocurrir a partir del 30 de septiembre de 1972 en Europa).

El esquema del «golpe legal» civil consistía en provocar el deterioro de la situación económica; la acción psicológica a través de los medios de comunicación de masas; una labor de penetración en las Fuerzas Armadas; y la preparación de grupos paramilitares para terrorismo de «apoyo» al deterioro económico.

Entre los grupos terroristas fascistas había dos que sobresalían por su organización y financiamiento: Patria y Libertad y Comando de Ex Cadetes. Habían tenido un origen distinto, pero, con el desarrollo de la situación, habían llegado a tener financiamiento, asesoría y adiestramiento común.

Patria y Libertad fue fundado por el abogado Pablo Rodríguez Grez, del comando de la candidatura de Jorge Alessandri en 1970. Este abogado estaba ligado por medio de Roberto Zúñiga, a los intereses financieros del grupo Matte-Alessandri, de los Edwards y de «los demócratas radicales» en contacto con la Anaconda. En Patria y Libertad figuraba el periodista Rafael Otero Echeverría, antiguo servidor incondicional del imperialismo norteamericano, que lograría infiltrarse por un corto tiempo en la agencia cubana Prensa Latina, en Santiago, robándole después dinero y equipos. Otero Echeverría, desde muchos años antes, se había integrado a la Internacional anticomunista, dirigida por la CIA, y era un protegido del grupo oligárquico de los Yarur, el cual también aportó dinero a Patria y Libertad desde sus comienzos.

Patria y Libertad fue planificada y creada como grupo fascista, bajo la directa supervisión del entonces secretario de la Embajada de los Estados Unidos en Chile, Keit W. Wheelock. Este personaje aparece en el libro-denuncia *Quién es quién en la CIA* con una serie de acciones, en diversos países del mundo, destinadas a derribar Gobiernos por cuenta de los consorcios gigantes de los Estados Unidos. Sin embargo, sus contactos con mandos de las Fuerzas Armadas chilenas no fueron los suficientes porque se estrellaron con una notoria desconfianza en el seno del Ejército, sobre todo al asumir Pablo Rodríguez, como abogado, la defensa del ex general Roberto Viaux, artífice intelectual del asesinato «por traición» del general René Schneider. Sólo la Marina, a través del grupo de Infantería de Marina, prestó apoyo al adiestramiento y provisión de armas de gran calibre a Patria y Libertad. En el Ejército, consiguieron una brecha en la provincia de Atacama a través de su jefe militar, el teniente coronel Oscar Haag Blaschke, para contrabandear armadas desde Argentina y Bolivia. En Santiago, reclutaron al coronel Roberto Souper Onfray, jefe del Regimiento Blindados Número 2.

Este grupo fascista se vinculó estrechamente a los latifundistas de las provincias sureñas, llegando a dominar la radio Sociedad Nacional de Agricultura, en Santiago, y teniendo entre sus miembros dirigentes a Benjamín Matte, presidente de ese organismo gremial oligárquico. Los oligarcas industriales, por su parte, pusieron al presidente de la Sociedad de Fomento Fabril, Orlando Sáenz, como «miembro secreto» de la directiva nacional («jefatura», según el lenguaje de los fascis-

tas), para vigilar, sobre todo, el buen uso de los fondos que los grandes industriales ponían a disposición de los terroristas.

El segundo grupo era el Comando de Ex Cadetes, que surgió después de que el director de la Escuela Militar Bernardo O'Higgins, coronel Eduardo Labbé, se negó, en diciembre de 1971, a rendir honores militares a Fidel Castro, de visita entonces en Chile.

Labbé era del grupo de los «duros». Estaba estrechamente vinculado a los generales Alfredo Canales Márquez y Hernán Hiriart, y cuando se descubrieron los complots de esta gente en marzo de 1972, Labbé fue llamado a retiro.

El Comando de Ex Cadetes tenía como «contacto» con la Embajada de los Estados Unidos al periodista chileno Federico Willoughby McDonald, que desde hacía años se cubría con la fachada de «jefe de relaciones públicas de la Ford Motor Company en Chile». Willoughby McDonald, valiéndose de su condición de civil, pero al mismo tiempo estrechamente relacionado al equipo de la CIA en la Embajada de los EEUU (formado por Joseph F. Manus, Daniel Arzac, Dean Hinton, Frederick Lastrash, Keith Wheelock, Arnold Isaacs, Donald H. Wiplers, Raymond A. Warren, James Anderson y John B. Tripton), tuvo la misión de «contactarse» con altos mandos de las tres ramas de las Fuerzas Armadas.

Los mismos clanes oligárquicos que financiaban a Patria y Libertad financiaban el Comando de Ex Cadetes, sólo que este gasto era mucho menor porque este comando, al revés que Patria y Libertad, era un grupo fascista de acción, de «encargos» y de «banco de información» sobre las actividades de la gente de izquierdas. Era realmente un grupo satélite de la CIA en Chile, y fue uno de los que formó parte del «plan Yakarta», aparecido en 1973, para asesinar a dirigentes y periodistas de la Unidad Popular. En septiembre de ese año, los generales fascistas obtuvieron del Comando de Ex Cadetes una gran ayuda para buscar, ubicar, torturar, interrogar y asesinar a miles de dirigentes populares.

A mediados de 1972, se estimaba que el Comando de Ex Cadetes estaba compuesto de unos 350 miembros repartidos, principalmente, en Santiago, Valparaíso y Concepción.

En septiembre de 1972, cuando estos grupos fascistas habían comenzado a cumplir con su parte en el plan de la Sociedad de Fomento Fabril y sabotaban líneas férreas, puentes, caminos y torres de alta tensión, además de asaltar y golpear a

dirigentes sindicales y políticos de nivel medio y bajo, la situación económica se deterioraba rápidamente debido a la imposibilidad de controlar, por parte del Gobierno, la acción de los grandes empresarios privados para bajar la producción, no invertir, especular y paralizar el aparato productivo en sectores alternativos.

En esos días, la Sociedad de Fomento Fabril ya había pasado la voz a sus agentes en la Democracia Cristiana, el Partido Nacional, el poder judicial, la Contraloría y los organismos gremiales empresariales y los profesionales en manos de representantes directos de la oligarquía, que «es necesario pasar a la última etapa»: la etapa del paro general de los patrones de todo el país.

En una fiesta en Viña del Mar, una noche, se reunieron altos jefes de las Fuerzas Armadas, y entré ellos, el general de brigada Alfredo Canales Márquez y el contralmirante Horacio Justiniano. El general Canales, muy borracho, confidenció a Justiniano que «tenemos en la sartén al hijo de puta». «Hijo de puta», en el lenguaje del señor general, quería decir «el Presidente de la República». Y agregó: «Este mes lo cagamos». El contralmirante Horacio Justiniano quedó muy preocupado, porque él nada sabía de que se proyectara un golpe militar. Ya en Santiago, le preguntó al general Prats de qué se trataba. Prats consultó con sus generales de la guarnición de Santiago, y éstos llegaron a la conclusión de que Alfredo Canales Márquez era «un peligro para la seguridad de las Fuerzas Armadas» al hablar así cuando se emborrachaba. El cuerpo de generales estuvo de acuerdo en que no se podía realizar «una planificación adecuada para vencer al enemigo (el Gobierno de Allende) atacándolo oportunamente y valiéndonos de sus debilidades, si hay personal nuestro que lo pone sobre aviso».

La reunión de los máximos mandos del Ejército en Santiago se había hecho sin la presencia de Canales Márquez, y allí se acordó llamar a retiro al general para evitar el alerta en el Gobierno. Se estuvo de acuerdo en «denunciar a Canales ante el presidente Allende» y decirle que el SIM había descubierto a tiempo el complot, el cual no tenía ramificaciones serias. Con eso, dijeron los generales, «continuamos haciendo confiar a Allende en nosotros, y podremos seguir a la expectativa de los hechos, sin interferir con las maniobras de los partidos políticos para sacar a Allende del Congreso». A Canales, los generales le dieron la explicación de que había sido el propio presi-

dente Allende quien había llamado a Prats para denunciarle el comportamiento de Canales en la unión social de Viña del Mar, y había exigido su retiro de las filas.

Esto fue lo que el 14 de septiembre de 1972 denunció públicamente Salvador Allende como «el plan septiembre» para «derrocarlo». Se basó en las informaciones que el general Prats le había llevado. Pero lo que Allende no sabía era que en verdad había un plan, pero en octubre.

### *Octubre de 1972*

En ese plan, planificado por la Sociedad de Fomento Fabril, y febrilmente apoyado por la CIA, no figuraban las Fuerzas Armadas. Era una conspiración civil para detener al país, ponerlo al borde del colapso total y obligar con ello a renunciar a Allende, tras perder un plebiscito que debía convocar como única manera de sacar al país de la paralización. La SOFOFA y la CIA estimaban, en septiembre, que octubre era una buena fecha porque ya la situación de «enflaquecimiento del apoyo popular al Gobierno es mucho, por las alzas, colas para comprar alimentos, escasez de todos los productos y la inoperancia del Gobierno».

El día 10 de octubre, a propósito de un proyecto del Gobierno de formar una compañía estatal de transporte camionero en la provincia de Magallanes, el presidente de la Confederación de Dueños de Camiones de Chile, León Vilarín (hombre ligado al «sindicalismo libre» de los Estados Unidos), paraliza a sus asociados en todo el país «en señal de protesta contra la dictadura estatal marxista». Se pliegan a su paro la Confederación del Comercio Detallista, dirigida por Rafael Cumsille (democratacristiano del equipo de Frei), «en defensa de la libertad de trabajo», y lo siguen la Asociación de Dueños de Microbuses y Taxibuses de la Locomoción Colectiva Particular (dirigida por demócratacristianos), Sociedad de Fomento Fabril, Sociedad Nacional de Agricultura, Confederación Nacional de la Producción y el Comercio, Colegio de Abogados, Colegio de Ingenieros y Colegio Médico. Se suman técnicos y empleados de algunos bancos comerciales todavía no estatizados... En suma, todos los empresarios privados del país, la mayoría de los profesionales y un pequeño sector de empleados se declaran en paro indefinido y levantan como bandera lo que llaman «el pliego de